



Bogotá, junio de 2021

Doctor

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

Presidente

Cámara de Representantes

Bogotá D.C.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Acorde a lo dispuesto en los artículos 112 a 115 de la Ley 5ª de 1992, **modifíquese** el artículo 5 del Proyecto de Ley 560 de 2021 Cámara – 401 de 2021 Senado “Por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones. Ley Gilma Jiménez”, el cual quedará así:

***Artículo 5º.** Agréguese un inciso al artículo 64 del Código Penal, el cual quedará así:*

Artículo 64.- Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

- 1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
- 2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.*
- 3. Que demuestre arraigo familiar y social.*

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.



El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará al condenado a prisión perpetua revisable, cuando haya sido sustituida por una pena temporal y haya cumplido las tres quintas partes de esta.

Atentamente.

JUAN CARLOS WILLS OSPINA
Representante a la Cámara por Bogotá

JUSTIFICACIÓN

La reforma constitucional introducida mediante el Acto Legislativo 01 de 2020 fue expresa en establecer como finalidad de la revisión de la prisión perpetua, la evaluación de la resocialización del condenado. Eso implica que la resocialización del condenado, prevista a nivel legal como función de la pena en el artículo 4 de la Ley 599 de 2000, adquirió rango constitucional. Es decir: La razón de ser de la revisión de la pena, es la evaluación de la resocialización. De modo que el presente Proyecto de Ley deberá cumplir con ese precepto, sin que para eludirlo sean suficientes las manifestaciones y constancias realizados en los debates del trámite de ese Acto Legislativo, porque con ellos no se suplen las interpretaciones sistemática y teleológica de la norma. En otras palabras: Aunque durante el debate del acto legislativo se haya manifestado que el condenado a prisión perpetua, ni aún revisada la pena al cabo de 25 años, tiene derecho a la libertad condicional durante la ejecución de la pena temporal sustituta, ese sigue siendo un derecho constitucional, pues no hay mayor y mejor expresión de la resocialización, que la libertad condicional.

Si se quiere garantizar la constitucionalidad de este Proyecto de Ley, deberá entonces reconocerse que, sustituida la pena de prisión perpetua luego de 25 años de ejecución, por una pena temporal, en el marco del cumplimiento de esa pena temporal, el condenado debe tener derecho a la libertad condicional, no al cumplirse los 25 años como podría malentenderse, sino a los cuarenta. Si entedemos la intención de los autores del proyecto, existe una pena severa que va de 480 a 600 meses de prisión, es decir, de 40 a 50 años, que es la que entenderíamos como “pena temporal”, en los términos del artículo 6° del Proyecto,

**JUAN CARLOS
WILLS**
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ



que introduce el Artículo 86 B al Código Penal. Al sustituirse, en los casos en que sea procedente, la prisión perpetua por el máximo de la pena temporal con ocasión de la revisión al cabo de 25 años de ejecución de la pena, la persona tendría que descontar las 3/5 partes de lo que le falta para cumplir el máximo, que son 180 meses, 15 años. En total, una persona resocializada, pagaría 40 años efectivos de prisión, que equivalen al menor extremo de la “pena temporal”. Por eso no se debe clausurar definitivamente la posibilidad de la libertad condicional, eliminando inconstitucionalmente la resocialización.